

# LA GUERRA EN COLOMBIA EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA-ANTROPOLÓGICA Y BIOÉTICA

Hugo Armando Sotomayor Tribín\*

## RESUMEN

Con una perspectiva histórica se analiza la actual guerra en Colombia. El esfuerzo de guerra que mantienen contra el Estado y el pueblo colombiano las guerrillas y las autodefensas ilegales, y que se sostiene con el negocio del narcotráfico, al haber generado grandes problemas sanitarios, ambientales y de derechos humanos es insostenible, a la luz de una política fundada en la antropología y la bioética. La debilidad y la poca presencia del Estado en muchas regiones del país favorecen las crisis sanitarias, ambientales y de derechos humanos.

**PALABRAS CLAVE:** Colombia, guerra, guerrillas, destrucción ambiental, derechos humanos, secuestro, narcotráfico.

## ABSTRACT

*The present war in Colombia is analyzed from a historical perspective. The combating efforts maintained against the State and society in the country by guerrillas and the illegal so-called self-defense ("autodefensa") groups, both allegedly supported by the drug-trafficking business, and by kidnapping, have become more and more unbearable particularly in the light of a policy based on anthropology and bioethics, due to the enormous human and environmental destruction problems they originate.*

*The weakness and poor presence of the State in several regions in the country help nurture and worsen very serious sanitary, environmental, and human-rights crises.*

**KEY words:** Colombia, war, guerrillas, environmental destruction, human rights, kidnapping, drug trafficking.

Partiendo del principio que señala que para tener una visión más clara de un fenómeno social particular se requiere ubicarlo dentro de una perspectiva histórica, global, sistémica, y compararlo con otros semejantes, se hace una aproximación a la relación de la guerra en Colombia, con un enfoque histórico, antropológico y bioético.

La guerra, además de mirarse dentro de los términos militares clásicos como "la política por otros medios", debe entenderse, en los de la salud pública y ecológicos, como "el peor desastre antrópico" y la "mayor de las emergencias complejas", y en los de los derechos humanos, como la "negación de la paz".

Hoy, cualquier agrupación humana o nación que se empeñe en alcanzar sus objetivos políticos a través de la fuerza, la guerra, debe saber, entender y aceptar que los medios para lograrlos deben buscar la propor-

\* Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Secretario de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Jefe del Área de Medicina Social, Facultad de Medicina, Universidad Militar "Nueva Granada".



cionalidad entre los objetivos perseguidos y los daños ocasionados.

Una lucha política llevada en forma de guerra, que hoy haga caso omiso de las tragedias en la salud pública, de los grandes daños ecológicos, y se empeñe en desconocer los derechos humanos de los combatientes y no combatientes, es, a la luz de la conciencia histórica actual, indefendible.

Si comparamos los diferentes momentos que la humanidad ha vivido a lo largo de los tiempos, es claro que la idea de los derechos humanos surgió a partir de la Revolución francesa, en 1789, y fue desarrollada de forma importante en el siglo XX; que la idea de salud pública se inició desde finales del siglo XVIII y principios del XIX y que logró un gran cuerpo doctrinario a partir de la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, y que la conciencia sobre nuestro gran hogar, el planeta Tierra, solo tiene de vida alrededor de cincuenta años.

Las luchas violentas, en forma de guerra, por la igualdad de oportunidades entre las personas, contra la discriminación social, religiosa, racial, sexual, nacional e internacional, y que hoy siguen siendo vigentes y fueron puestas en práctica en forma generalizada a partir del surgimiento de los movimientos socialistas en el siglo XIX, por más que estén justificadas no pueden desconocer la necesidad de mantener la proporcionalidad entre los objetivos perseguidos y los daños ocasionados.

Si esta proporcionalidad no es respetada, las luchas, las guerras, en esta perspectiva amplia, se tornan en un verdadero retroceso histórico. Si este referente, verda-

dero puntal revolucionario en el desarrollo de la humanidad, es violado, resulta claro que los responsables de semejante trasgresión no solo no son revolucionarios, sino que son abiertamente contrarrevolucionarios. A nombre de la lucha contra la discriminación y la desigualdad no se pueden violar otros derechos humanos, generar más hambre y dañar el entorno natural.

Y si semejante lucha se hace soportada en la elemental creencia de que la nueva sociedad que puede emerger de ella hará desaparecer los aspectos negativos y destructivos del ser humano, ello no es sino un burdo idealismo, una presentación ahistórica. Baste para esto recordar en lo que se convirtió la sociedad creada en la ex Unión Soviética: burocratismo, militarismo, totalitarismo, destrucción medioambiental.

Nuestra guerra actual es parte de nuestro historial de guerras. Las guerras intertribales prehispánicas, libradas sin armas de metal y de fuego, sin claras ideas sobre vanguardias, retaguardias, tácticas militares, de líneas de apoyo logístico, etc., se desarrollaron en una época de aislamiento de América de los grandes focos de enfermedades infecciosas del Viejo Mundo.

La llamada Conquista española se puede entender como una guerra de tierra arrasada, en donde los europeos utilizaron la tea incendiaria, los mastines, el caballo, las armas de metal y fuego, y los sistemas de guerrear propios de ejércitos curtidos en luchas contra otros ejércitos, con el fin claro de sojuzgar a los nativos e imponerles una lengua y una religión nuevas, mientras las sociedades nativas, ante semejante embate de ambición material y desprecio humano, huían, abandonaban sus cultivos, luchaban o se suicidaban, acto



este último practicado por colectividades enteras, con el solo propósito de negarles a los peninsulares las mieles de la victoria final. Semejante encuentro, militarmente disparejo, fue agravado por la llegada, con los conquistadores, de enfermedades desconocidas en estos lares: paludismo, sarampión, gripe, viruela, etc., y por el hambre epidémica, consecuencia de la destrucción de las familias, la crisis agrícola por ausencia de mano de obra y la apropiación de las reservas de las comunidades por cuenta de los invasores ibéricos.

Instalada la Real Audiencia e iniciada la época colonial, el hambre epidémica, que se tornó endémica, obró conjuntamente con la realidad psicosocial de servidumbre para los indígenas y la esclavitud para los negros, como caldo de cultivo ideal para las oleadas de infecciones de transmisión aérea procedentes del Viejo Mundo y la instalación permanente de las enfermedades transmitidas por vectores, como la ya mencionada malaria, la fiebre amarilla y las filariasis, y las enfermedades por transmisión hídrica y por alimentos. Las guerras libradas en esa época se desarrollaron principalmente en el litoral caribe, entre la potencia dominante, España, y sus contrincantes y ambiciosos enemigos, Francia, Inglaterra y Holanda.

Tras la Independencia, la navegación a vapor por el río Magdalena —establecida a partir de 1825—, los procesos de colonización y las guerras civiles fueron factores determinantes para que todas las enfermedades llegadas del Viejo Mundo y las ya existentes antes de ello, como el carate, la leishmaniasis cutánea, el mal de Chagas y la tungiasis, campearan en las diferentes regiones del territorio del país. La guerra fratricida, de baja intensidad de fuego y con frecuentes prácticas de combatir,

teñidas de cobardía y criminalidad, se adueñó del país desde 1841 hasta la llamada Guerra de los Mil Días e hizo una breve reaparición entre 1930 y 1932. En los primeros 131 años de vida republicana, comprendidos entre 1819 y 1950, la fiebre amarilla urbana ingresó al interior del país, en 1830, y alcanzó la región amazónica a través del río Putumayo, desde su primera navegación a vapor en 1874-75, y el cólera llegó a Cartagena y se diseminó a lo largo de la ribera del río Magdalena, entre 1848 y 1852. Las guerras civiles, con sus típicas guerras de posiciones, facilitaron las disenterías, el paludismo y la fiebre amarilla, y ocasionaron importantes migraciones del campo a las poblaciones en formación.

En los últimos 55 años, de 1948 a hoy, 2003, la guerra ha sufrido tres importantes cambios, a la luz de las motivaciones y fuentes de financiación: entre 1948 y 1964 fue una confrontación entre liberales y conservadores; de 1964 a 1985, un enfrentamiento político entre el Estado y la subversión armada socialista, a la sombra del conflicto Este-Oeste, socialismo-capitalismo, y a partir de 1985, pero muy en especial de 1991, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y su bloque socialista, el esfuerzo de guerra de los opositores al Estado pasó a depender económicamente del negocio de la marihuana, la coca y la cocaína, la amapola y la heroína, que desde años antes los grupos de negociantes y criminales habían activado, aprovechando su gran demanda por parte de Estados Unidos y Europa; de la extorsión a las compañías petroleras extranjeras, del desvío forzoso de las rentas de los municipios y departamentos y del terrible delito del secuestro. El crecimiento de los grupos enemigos del Estado pasó de tasas vegetativas a tasas exponenciales, en la me-



dida que comenzaron a depender del dinero de las “vacunas” o gramajes impuestos a los sembradores y comerciantes de la coca, la cocaína, la amapola, la heroína, la marihuana y el hachís; su crecimiento ha dependido en forma directa del número de hectáreas sembradas con esos cultivos.

En estos últimos 20 a 17 años, por obra del poder económico de las organizaciones armadas opuestas al Estado y, por consiguiente, fuera de la ley, al pasar la guerra, en no pocas ocasiones, de ser una típica guerra de guerrillas a una cuasi guerra de movilización y de posiciones, las minas antipersonales comenzaron a cobrar cada vez más importancia y a generar más muertos y heridos, al mismo tiempo que la leishmaniasis, propia de la guerra de guerrillas, sumaba cada vez más afectados entre los soldados de las Fuerzas Militares y los guerrilleros, y en la tropa de las llamadas autodefensas ilegales o “paramilitares”. Hoy se calcula que en el país están sembradas entre 70 y 100 mil minas antipersonales, y que el riesgo para un campesino de las regiones en donde ellas están sembradas, de ser mordido por una serpiente, es muchísimo menor que el de verse afectado por una mina antipersonal. En Colombia, hoy, ocurren anualmente alrededor de 100 accidentes ofídicos graves y 250 por minas antipersonales. Entre 1990 y junio de 2003 ha habido en el país 2 806 accidentes por minas y objetos explosivos abandonados, con un total de 1 487 heridos y 468 muertos. El pasado 25 de junio de 2003 el gobierno nacional, en cumplimiento de la firma que hizo, en el año 2001, del tratado de proscripción de las minas antipersonales de Ottawa, de 1997, comenzó a destruir las bien localizadas 20 000 minas que protegían instalaciones militares y de alto valor estratégico para el país, y desde aquel

año Indumil, industria militar, ha dejado de producir esos artefactos.

A mediados de los años 80, en pleno auge de las organizaciones de narcotraficantes, los grupos guerrilleros, al orientar su política de secuestros sobre las familias de los grandes jefes o capos de los negocios de la marihuana, la coca y la amapola, activaron una típica respuesta “antígeno-anticuerpo”. Se crearon los grupos muerte a secuestradores (MAS), que luego devinieron en el movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, que la práctica política criminal del secuestro generó otra práctica “político”-criminal.

El débil Estado colombiano debió enfrentar a los carteles criminales de Cali y Medellín, y luego presenciar y tolerar, por su misma debilidad institucional y la infiltración del poder de esos carteles en diferentes esferas gubernamentales, la conformación cada vez más fuerte de los “paramilitares” o autodefensas.

Semejante confrontación entre guerrillas y autodefensas ilegales, en la que muchas veces el Estado, en virtud de su debilidad estructural, la impunidad y la corrupción, ha sido testigo pasivo, comenzó a afectar tan hondamente a todo el país, que hoy Colombia muestra una cifra de desplazados por la violencia que puede oscilar entre millón y medio y dos millones de personas, según varios observadores.

Si bien los desplazados y sus problemas de vivienda, salud y empleo hoy son gigantescos, y motivo de serias preocupaciones y de esfuerzos ingentes del Estado, es claro que el fenómeno del desplazamiento por razones políticas no es propio de la actual confrontación entre



autodefensas y guerrillas, y entre estas últimas y el Estado, sino que ha sido un acompañante de todas nuestras guerras civiles del siglo XIX, de la llamada violencia de los años 50 y 60 del pasado siglo XX y de los primeros años de la llamada lucha subversiva. Los desplazados, que antes recibieron el nombre de exiliados, perseguidos, migrantes, etc., fueron los responsables de los llamados barrios de invasión. Recuérdense en Bogotá los barrios "Policarpa Salavarrieta" y las "Colinas", de los años 60 del pasado siglo XX.

La mayor atención que hoy reciben los desplazados obedece a dos causas principales, su magnitud y la mayor conciencia que tiene la humanidad en general, y la política internacional y la nación colombiana en particular, sobre el impacto de la guerra y los derechos humanos.

Las guerrillas de las FARC y el ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la medida que para su sustento y crecimiento han dependido de las "vacunas" y "gramajes" que le han impuesto a los cultivadores y traficantes de coca, amapola y marihuana, y sus respectivos alcaloides, se han convertido en una fuente de riqueza para el capitalismo, en general, y el imperialismo, en particular, a quien las primeras consideran su enemigo principal, y también en una fuerza generadora de gran destrucción ambiental. El negocio del narcotráfico, que por su actual condición de ilegal tiene una utilidad neta superior a la de cualquier actividad comercial lícita, la del 293%, deja el 90% de esas utilidades en manos del mercado de Estados Unidos. Por cada hectárea sembrada de coca se necesita acabar con cuatro hectáreas de selva de tierras bajas; por una hectárea de amapola se necesita tumbar tres hec-

táreas de selva andina, y por una de marihuana se deben tumbar hectárea y media de selva. Las FARC, por cuenta del gramaje impuesto a los cultivos de coca, obtuvo entre 1998 y 1999 la suma de 180 millones de dólares, mientras el ELN logró 30 millones de dólares.

Pero el efecto devastador sobre el entorno natural no solo es producto de la relación de siembra de cultivos y tumba de selvas, sino también de una acción deliberada por parte de los cultivadores de ellos, de incrementar su rendimiento con la utilización de herbicidas, insecticidas y fungicidas, que ayuden a esos cultivos en su lucha por los nutrientes del suelo y contra las plagas que los dañan, y por la fumigación aérea que los diferentes gobiernos nacionales y estadounidenses han impulsado desde hace varios años.

La lucha entre los cultivadores y los beneficiados de estos –las guerrillas y las autodefensas, por el máximo rendimiento de los cultivos de coca y amapola–, y el gobierno nacional y los estadounidenses, el primero con el propósito de estrangular las finanzas de los grupos armados y acabar con los cárteles de narcotraficantes, y los segundos impulsados por un típico criterio de interdicción policíaca y una visión etnocéntrica, en donde ellos se consideran víctimas y a nosotros como los victimarios, ha convertido esa en una verdadera lucha ecocida.

Esta guerra ecocida es bien diferente de la preocupación que la gran potencia actual, los Estados Unidos, ha ventilado desde la guerra del Golfo, en 1990, y en la reciente invasión y deposición de Saddam Hussein en Irak, por la existencia y posible uso de armas biológicas de destrucción masiva. En Colombia este tipo de



armas no son motivo de preocupación, como sí lo son los atentados contra los oleoductos y las estaciones de bombeo de petróleo. En nuestro país, las únicas armas biológicas que se han utilizado han sido las que solo afectan a individuos o pequeños grupos: envenenamiento de las aguas que pudieran consumir las fuerzas sitiadoras, comandadas por Simón Bolívar, de Cartagena; adición de escopolamina a la chicha consumida por los soldados patriotas, por cuenta de las campesinas boyacenses adeptas a la causa realista, aun después de la Batalla de Boyacá; flechas envenenadas, usadas por los indígenas motilonos del Catatumbo contra los empleados de las compañías petroleras, en los años 40 del siglo XX, y, en la actualidad, adición de excrementos humanos a las minas antipersonales y a las “pipetas” usadas por los guerrilleros en sus asaltos a los pueblos más pobres entre los pobres.

Las organizaciones de las FARC y el ELN, en su intento de chantajear a las compañías nacionales y extranjeras vinculadas a la industria petrolera, y obtener, también por esta vía, dividendos económicos de las compañías encargadas de las reparaciones de los oleoductos, han convertido los atentados contra los oleoductos y las estaciones de bombeo en un triste negocio ecocida, generador de hambre y desplazamientos entre los campesinos que viven a lo largo del “tubo”. Los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas: en el año 2001 sumaron 170, en 2002, 41, y en lo que va corrido de 2003, 17. En los primeros diez días del mes de agosto del año en curso, 2003, al oleoducto del Putumayo esas organizaciones le han hecho diez atentados.

Semejantes prácticas militares, deliberadamente ecocidas, libradas justo cuando la humanidad entera no solo

tiene mayores conocimientos sobre la interrelación sistémica que opera a nivel de todo el planeta Tierra y cuando se ha construido un discurso ecológico y bioético sólido, no son más que producto de la ignorancia, la arrogancia y la persecución de quimeras a través de formas de pensar rústicas y elementales. Esas prácticas ecocidas, tan propias del capitalismo, lo que están demostrando es que las organizaciones responsables de ellas se alimentan de una de las ideas matrices del capitalismo, que el hombre es el amo de la naturaleza; de la concepción errada de la capacidad infinita de nuestro hogar, la Tierra, y de un discurso militarista, elemental y totalitarista, incapaz de ajustar la idea de lo que se llamó, desde 1992 en Río de Janeiro, en la llamada Cumbre de la Tierra, el desarrollo sostenible.

La práctica de financiación que las guerrillas introdujeron desde los años 80 no solo activó, como se dijo antes, al grupo MAS y a las AUC, sino que nos hizo retroceder, en términos de derechos humanos, a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando la práctica de la captura, comercio y explotación de las poblaciones negras africanas fue una terrible realidad. El secuestro activado por las fuerzas guerrilleras conjuga la captura, el comercio y la explotación de seres humanos, ya no por el color de la piel, sino por señales externas, que a juicio de esas organizaciones indican algún tipo de excedente económico. Al secuestrado, a diferencia del negro esclavizado, no se le pone a trabajar en faenas generadoras de acumulación primitiva de capital, sino que de él se aprovecha lo que ya ha producido en ese sentido. Al esclavo negro se le ponía a trabajar, del secuestrado se toma el capital logrado por su anterior trabajo. Una típica práctica de acumulación primitiva del capital.



Por el escaso desarrollo de los derechos humanos, en su tiempo los viejos esclavistas jamás pretendieron ocultar que su intención era la generación de capital, mientras que justo por el mayor desarrollo de dichos derechos, en la actualidad los secuestradores tratan eufemísticamente de presentar su intención de generar capital como un acto de toma de "prisioneros de guerra" o, en el peor de los casos, como "retenidos". Como los secuestradores actuales saben perfectamente que su acto es un crimen, lo tratan de disfrazar en forma tan burda que al mismo tiempo insultan a la población general, al considerarla mentalmente incapaz de ver sus verdaderas intenciones económicas. Entre 1998 y 1999, el negocio del secuestro y la extorsión le generó a las FARC la suma de 198 millones de dólares, y al ELN, 40 millones de dólares.

A pesar de que en Colombia siempre se ha dicho que la sociedad es civilista, en oposición a las tendencias militaristas de otras sociedades latinoamericanas, no es sorprendente que las fuerzas guerrilleras y de las autodefensas hayan sobrevivido con una práctica y un discurso autoritario y militarista. La razón de esto es, indiscutiblemente, que esas organizaciones se han apoyado de forma oportunista en los sueños económicos de algunos sectores de la población. Recordemos que nuestra historia, desde que entramos en la primera globalización, tras entablar contacto con los europeos en el siglo XVI, ha estado signada por la búsqueda de los "El Dorado": las sepulturas del Sinú, las minas de oro y plata bajo el dominio español, la guaquería, la quina, el caucho, el petróleo, las esmeraldas.

Autodefensas y guerrillas, al apoyarse en algunos sectores de la población urbana y rural que se han dedicado al cultivo y comercio de la coca y la amapola, lo que han

hecho básicamente es alimentar las ambiciones de los "El Dorado" que muchos de ellos tienen, y no justificar su acción como una alternativa de "simplemente" salir de la pobreza, según han querido presentarla.

En la guerra, entre la persecución violenta de quimeras por cuenta de las guerrillas, la respuesta consecutiva de las autodefensas y la obligatoria respuesta estatal a los desafíos de esas organizaciones fuera de la ley, y lejos de cualquier enfoque humanista, enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, el sida y otras de origen infeccioso han crecido exponencialmente, a la par con los efectivos de esas organizaciones y el cultivo de la coca y la amapola. En esta guerra irregular, de bajo potencial de fuego y prácticas cobardes y criminales, han florecido todo tipo de trastornos mentales, activados por el terror, la inseguridad y la desesperanza.

Y precisamente una de las condiciones de esta guerra, la de ser una guerra de guerrillas, se ha convertido en una de las causas del fenómeno que a la luz de los tratados y convenios internacionales existentes sobre la guerra han llamado poderosamente la atención y cobrado innumerables víctimas en los últimos años: la violación de la misión médica.

Hoy cualquier lucha política, y entre ella la "política por otros medios", la guerra, no tiene ninguna justificación si no reposa en una mirada rigurosa, poliédrica, de toda la complejidad del ser humano como especie, como individuo, como sociedad y como hijo de la madre Tierra.

La guerra que se empeñan en proseguir las organizaciones armadas en Colombia se mantiene básicamen-



te por cuenta del vínculo que ellas sostienen con el narcotráfico, por la debilidad del Estado y por nuestra tradición, con sus propios procesos de endoculturación, de la violencia como forma de solucionar problemas. Para esto, baste recordar que de los 183 años que tenemos de vida republicana, 123 –es decir, un poco más del 67%– la nación colombiana ha permanecido en guerra fratricida.

No se puede salir de la pobreza económica, superar las grandes desigualdades sociales, a través de prácticas esclavistas y ecocidas, del militarismo, de la creación de grandes masas de desplazados, de crear condiciones favorecedoras de enfermedades y de impedir las actividades de la misión médica. Es imposible ser alternativa política sin una profunda fundamentación antropológica y bioética.

---

## B I B L I O G R A F Í A

---

Escuela Superior de Guerra. Fuerzas Militares de Colombia. Ministerio de Defensa. Codenal, Curso de Defensa y Seguridad Nacional, 21 de abril a 20 de junio de 2003.

Richani, Nazih. *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*, IEPRI, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 2003, pág. 113.

Solana Ruiz, José Luis. "Antropolítica", en *Antropología y complejidad humana. La antropología compleja de Edgar Morin*, Granada, Editorial Comares, S. L., 2001, pp. 421-465.

Sotomayor Tribín, Hugo. "Enfermedades y geopolítica en Colombia". Academia Nacional de Medicina, *Medicina*, 68 (45): 21-26, septiembre de 1997.

\_\_\_\_\_. "Historia geopolítica de las enfermedades en Colombia", *Maguare* (revista del Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia), N° 13: 73-84, 1998.

\_\_\_\_\_. "La guerra y la salud en Colombia", *Nova & Vetera* (boletín del Instituto de Derechos Humanos "Guillermo Cano"), N° 33: 39-46, noviembre-enero, 1999.

\_\_\_\_\_. "Geopolítica de la enfermedad en Colombia", *Tribuna Médica*, 100 (3): 5-8, septiembre de 2000.

\_\_\_\_\_. "Infancia, salud, pedagogía y guerra en Colombia", *Pediatría* (órgano oficial de la Sociedad Colombiana de Pediatría), 36 (4): 305-307, noviembre de 2001.

\_\_\_\_\_. "De las armas biológicas a la guerra biológica en la historia de Colombia", *Tribuna Médica*, 102 (1): 5-14, 2002.

\_\_\_\_\_. "Epidemiología de la guerra y la corrupción en Colombia", *Tribuna Médica*, 102 (7): 301-308, 2002.

\_\_\_\_\_. "La globalización y las etapas epidemiológicas de la historia de Colombia y sus regiones", *Tribuna Médica*, 102 (8): 349-358, 2002.